

LA BATALLA FRANCESA POR LA AYUDA OFICIAL A LA ESCUELA PRIVADA

A lo largo de los seis años difíciles y borrascosos de la IV República francesa, diversas cuestiones de la Enseñanza se han convertido en problema capital en el orden del día político de los sucesivos Gobiernos. En general, son las naciones latinas de la Europa occidental (Italia, España, Francia...) las que en los últimos tiempos vienen preocupándose por dar a sus leyes educativas una forma más científica, justa y moral, con arreglo a las nuevas instancias que plantea el mundo europeo salido de la última gran guerra. En Francia, estas cuestiones tienen no ya solamente un matiz, sino profundamente características específicas y muy francesas, cuyas razones vitales de existencia descansan y se nutren tanto o más que en la enseñanza en sí, en la agitada y tormentosa vida política que viven los franceses sobre un secular estrato de encarnizado debate religioso. La IV República francesa quiere ser fiel a la invariable tradición laica de sus predecesoras, y en virtud de este principio, su oposición a cuanto huele a confesional o a católico le inquieta e incita a buscar soluciones y a tomar resoluciones de injusticia.

LA BATALLA POLÍTICA

La condición puramente laica de la *Escuela Pública*, según se denomina en Francia a la escuela oficial del Estado, ha mantenido ideológicamente su obstrucción pugnaz, desde los sucesivos Gobiernos, a la escuela libre o privada, en la cual se agrupa la mitad de los alumnos de la Enseñanza Media, y casi un millón y medio de niños en la Primaria. A tales extremos llega esta pugna, que los esfuerzos católicos por conseguir ayuda oficial para sus escuelas privadas han topado siempre con un amplio y unánime sentimiento de protesta por parte de los sectores republicanos de izquierda y de los comunistas, los cuales, aun estando en el poder, no pudieron acabar con la existencia de esta enseñanza confesional, sin echar prácticamente por tierra las libertades tan cacareadas de la gran República. En consecuencia, los enemigos de la escuela libre han hecho hincapié en resistirse a todo progreso hacia la concesión de ayudas oficiales a la enseñanza católica, comunicándose la tensión y la batalla, de los Centros técnicos y administrativos de la Educación a los más importantes y señeros de la dirección política de Francia. Una cuestión de enseñanza que ha inquietado a los prohombres del Gobierno; ha suscitado polémicas encarnizadas en la prensa y el radio; ha movido propagandas electorales; ha decidido el signo político de las elec-

ciones de junio de 1951, derribando sucesivamente los Gobiernos Queuille, Petsche, Schuman, Mayer y Pléven; suscitando nuevas colisiones entre los partidos políticos franceses; llevando, incluso, a la huelga al Cuerpo docente francés, y al desconcierto a los responsables políticos del país.

He aquí, pues, cómo un problema educacional rompe los límites de su propia jerarquía, extendiéndose a la política y haciéndose carne principal de la cuestión más delicada y dolorosa que vive Francia desde hace unos sesenta años. Este problema religioso (porque en realidad se trata de la antigua colisión entre el Gobierno laico y la enseñanza católica) ha mantenido separado al país durante más de medio siglo, agudizando más y más la situación política, hasta el punto de que difícilmente cabe imaginarse un Gobierno semi-estable mientras no se dé solución a esta enfermedad que padece la vida social francesa.

EL DOBLE IMPUESTO ESCOLAR DE LOS CATÓLICOS

Tal y como se presenta la cuestión, ya metidos en 1952, casi al año de las elecciones en que fueron derrotadas las fuerzas de la oposición izquierdista, parece que se trata, no ya de la ayuda o desamparo a la escuela privada, sino de la existencia y pervivencia de este mismo sistema de enseñanza. Ya durante todo el período preelectoral último, los católicos se manifestaron firmemente dispuestos a defender sus trincheras, aconsejados por las jerarquías eclesíásticas, que siguen estimando que las familias católicas tienen el derecho y el deber de agrupar a sus hijos en un ambiente religioso. De otro lado, la legislación francesa de la IV República ha reconocido en teoría este derecho católico a la enseñanza confesional, al admitir la existencia de escuelas libres o cristianas. Sin embargo, esta legislación ha cuidado, en la práctica, de reservar a la Escuela pública la totalidad del presupuesto oficial, restando a la privada buena parte de sus posibilidades de acción. Las leyes francesas respecto a la enseñanza libre, antes de ser aprobada por la Asamblea Nacional la propuesta Barangé, en 21 de septiembre de 1951, mantenían para la escuela privada una doble desventaja, basada en una forzosa escasez de recursos. Esta escasez obligó a los dirigentes de aquella escuela, por una parte, a reducir los honorarios de sus maestros, y a gravar sensiblemente las matrículas y gastos de los escolares, por otra. Al mismo tiempo, el encarecimiento gradual de la vida francesa contribuía a ensombrecer el hosco panorama, en esa absur-

da carrera de persecución que conduce al círculo vicioso: la elevación correlativa de precios, sueldos e impuestos. Con la subida de estos últimos, la escuela privada ha tenido que pagar justamente una doble cantidad: el impuesto normal, siempre ascendente, al Estado para la enseñanza laica, y el voluntario de la escuela a la cual concurren sus hijos.

LA "PETITE HISTOIRE" DEL DEBATE ESCOLAR

Veamos rápidamente cómo se desarrolló el proceso político de la discusión en torno a la existencia de la escuela privada. Los defensores de ésta esperaron del M. R. P., el gran partido de los demócratas cristianos, que se encuentra en el poder desde el fin de la guerra, sabría financiar el concurso que aportaba a los otros partidos de la mayoría (incluso a los comunistas), y que obtendría de la extrema izquierda la ayuda material, sin la cual la libertad de enseñanza sólo sería una fórmula hueca. Pero el M. R. P., a pesar de las exorbitantes concesiones hechas, vió oponerse a cada una de sus tentativas una resistencia empeñada, decidiendo, en fin, acomodarse, trocando libertades por seguimiento en el poder. Pero, cosa curiosa, fué precisamente un demócratacristiano, M. P. H. Teitgen, quien en marzo de 1945 intervenía en la Asamblea Nacional exigiendo la supresión de la subvención a las escuelas primarias privadas, establecida por Petain en 1942, confundiendo, ya de raíz, las razones políticas del Gobierno derrotado con las razones educativas y religiosas de aquella ayuda. Entonces se habló de dar al problema "una solución definitiva y satisfactoria". ¡Hace casi siete años!

Llega luego la legislatura que duró largamente de 1946 a 1951, y, a pesar de las profecías y de las oficiosidades de monsieur Tietgen, la Cámara de Diputados no decidió nada respecto a las escuelas, aunque ya parte del ambiente emitía votos por la libertad de enseñanza, para que se concediesen subvenciones a aquellas escuelas "a cuyo frente morían de hambre millares de maestros".

EL DECRETO POINSO-CHAPUIS Y LA LEGALIDAD REPUBLICANA

En mayo de 1948, la señorita Poinso-Chapuis, por entonces miembro gubernamental, dictaba un Decreto relativo a las atribuciones de la Unión Nacional y de las Uniones Departamentales y Locales de Asociación familiar, habilitándolas para recibir subvenciones, que, naturalmente, podrían aplicarse a las escuelas libres. Este Decreto, que anulaba en buen grado la virulencia "oficialista" y laica de la antigua ley Perry de 1886, hubiera podido aliviar la dificultad financiera de la educación de los hijos de familias menos pudientes, las cuales hubieran podido ejercitar de hecho el derecho a la elección voluntaria del tipo de instrucción. Las izquierdas protestaron inmediata-

mente. El mismísimo León Blum se creyó en el deber de declarar: "El principio legal y constitucional de la laicización está afectado, pues la laicización estatal excluye el que los recursos públicos se destinen a la escuela libre o a las familias que la frecuentan, bajo forma de subvenciones directas o indirectas".

El Decreto Poinso-Chapuis fué sometido al Consejo de Estado, el cual emitió dictamen en 3 de junio de 1949 y en 13 de abril de 1950, declarando y confirmando como jurisprudencia los principios de laicización, pero afirmando también que, a condición de mantener la equidad de trato entre las Asociaciones de Padres y Alumnos de la Escuela privada y las de la pública, las subvenciones eran en absoluto conformes con la legalidad republicana.

Ante la inminencia de las elecciones de 1951, los católicos franceses exigieron de sus candidatos a la Cámara que se manifestaran abiertamente ante el escabroso problema de la educación cristiana de sus hijos. En noviembre de 1950, el obispo de Châlons declaraba, en consecuencia, lo siguiente: "Tengo que invitaros a llevar al plano cívico las graves preocupaciones que impone a nuestras conciencias el ejercicio de la indispensable libertad de pensamiento: nuestras escuelas libres... No queremos que las retribuciones escolares sean cargas abrumadoras que impidan a las familias modestas utilizar la escuela cristiana que desean. No queremos resignarnos a estos sueldos irrisorios, que no corresponden ni al valor, ni al desvelo, ni a las necesidades de nuestros maestros y maestras. Es preciso que los católicos comprendan los problemas de la enseñanza libre y que los hagan conocer. Y en las próximas elecciones, los católicos deberán manifestar en este punto claramente sus convicciones y su voluntad a los candidatos que soliciten su voto".

PREPARATIVOS ELECTORALES

La Comisión Escolar (1), que ya venía funcionando desde noviembre de 1950, bajo la presidencia del socialista independiente M. Paul Boncourt, simpatizaba ya con la idea de un acuerdo para la subvención de la escuela privada, a pesar del laicismo de su presidente, quien —según declaró en el diario *Combat* de 15 de noviembre de 1950— condescendía tácitamente con este acuerdo, añadiendo: "La opinión republicana alienta firmemente adherida a la escuela laica, acogedora para todos, por ser la condición de la unidad moral de este país. Pero hay que afrontar una realidad: la escuela confesional existe y tiene alumnos. En la

(1) Esta famosa y vapuleada Comisión fué una creación del Primer Ministro René Pléven en mayo de 1950, siendo una institución de estudio para el conjunto de problemas escolares. Está compuesta por 29 miembros, pertenecientes a los distintos sectores políticos, y tiene por cometido el de establecer un Estatuto jurídico general de la Enseñanza. El 17 de septiembre último, M. Paul Boncourt presentó su dimisión de presidente, con lo cual la Comisión quedó huérfana de la aportación socialista a su plan de estudios.

Primaria, 1.300.000 niños; en la Media, los Institutos y las Escuelas libres se reparten a la juventud casi por mitad. ¿Puede el Estado desatenderlas, especialmente teniendo en cuenta que no puede acoger en sus escuelas, a todas luces insuficientes, la totalidad de los que quieren ingresar en ellas? ¿No debe ayudar, y al mismo tiempo controlar, estas Escuelas libres que instruyen una parte de la juventud francesa? Es lo que va a decir la Comisión". Pero la Comisión habría de encontrar serias dificultades en lo sucesivo.

A un paso de las elecciones se celebró el primer Congreso Nacional de Enseñanza Libre, con asistencia de sesenta parlamentarios, sobre los doscientos alcaldes y consejeros generales, y numerosos obispos respaldados por 30.000 fieles a la causa de la escuela católica, deseosos todos de obtener "lo más pronto posible el régimen de justicia a que tienen derecho los franceses". Pero por su parte, los laicos no estaban inactivos. La antigua "Liga Francesa de la Enseñanza", agrupadora del Cuerpo docente estatal de las izquierdas, celebra su LXII Congreso en Argel, del 21 al 24 de marzo de 1951. Su moción presentada entonces, a propósito de nuestro tema, puede resumirse en tres apartados:

1.° Prohibición legal de cualquier clase de ayuda oficial a las Escuelas privadas.

2.° Nacionalización de la Escuela pública, en un proyecto que crearían las grandes entidades laicas para ser presentado al pueblo francés. De este modo, la Escuela pública acogería en su seno a todos los niños de Francia; y

3.° Votación y aplicación inmediatas de créditos que permitan acoger a todos los niños franceses en la Escuela pública.

Resumiendo: la propuesta izquierdista consistía en la nacionalización absoluta de la Enseñanza, cortando así toda posibilidad de ejercicio de la Escuela privada. En consecuencia, se organiza, muy políticamente, un Congreso de la "Federación Nacional de los Consejos de padres de alumnos de la Escuela laica", con asistencia de medio millón de familias, si hemos de creer a la propaganda de las izquierdas. De este modo se pretendía neutralizar los efectos del inmediato "Congreso de padres de alumnos de la Escuela libre". La nacionalización significaba, pues, la muerte *legal* de la Escuela libre, puesto que, según el proyecto presentado, estaba "prohibido enseñar fuera de la Escuela nacional".

PERO LLEGARON LAS ELECCIONES

Y las cosas comienzan a cambiar para los católicos franceses, y no se quiere perder el tiempo. No en vano se han visto fracasar, por seis veces consecutivas, los proyectos de conseguir la Enseñanza libre durante seis años largos. Frente a una mayoría política hostil, las minorías parlamentarias católicas supieron seguir adelante en sus empeños. ¿Es para asombrarse, que después de haber logrado reunir en la nueva Asamblea una mayoría de sufragios favorables, se hayan apresurado a ponerla a prueba antes de que surgiera ninguna cuestión capaz de dislocarla?

La batalla proseguía en Francia. Católicos e izquierdas, unos en el poder, otros en la oposición, estaban bien aconsejados y apercebidos. La pugna comenzó ya con la declaración ministerial del Presidente del Consejo ante la Cámara. La polémica en torno a la Escuela fué a un mismo tiempo cabeza de turco y caballo de batalla de las rencillas político-religiosas de la Francia actual. Inmediatamente hubo escisión parlamentaria y combate continuado, que costó el puesto de Primer Ministro de la nueva legislatura, sucesivamente, a Queuille, Petsche, Schuman, Mayer y Pléven. La Comisión Paul Boncourt, por su parte, seguía el camino que le conduciría sensiblemente, si no al fracaso, sí, al menos, a la falta de resultados prácticos. El M. R. P., los católicos simpatizantes de las izquierdas, no pasaron por ciertas intolerancias tramitadas con la Escuela privada, por lo que fué escindido del bloque laico por el propio Primer Ministro Pléven. Así apareció en liza una tercera fuerza.

Tal y como se encontraban los ánimos franceses en relación con la reforma de la Enseñanza, los nuevos y sucesivos jefes políticos no tuvieron otro remedio que intentar abordar los espinosos problema de la colisión religiosa en el plano de la Enseñanza. Con fuerza por ambas partes, pese a la mínima mayoría parlamentaria, los católicos no pudieron sacar adelante sus proyectos íntegros. Los Primeros Ministros seguían sucediéndose. René Mayer propuso, para conseguir su investidura, la creación de un *subsídium familiar* como complemento a los niños de la Escuela primaria, y cierto número de becas para la Enseñanza Media, propuesta que fué negada por la Cámara como consecuencia de la abstención de las derechas, por lo que no pudo formar Gobierno. Cosa parecida sucedió con el sucesivo intento parlamentario de Maurice Petsche. Esta vez se propuso la revisión de salarios; se habló de prestar ayuda a niños y estudiantes de Institutos... Pero las banderas políticas seguían alzadas. Un nuevo caso en que los intentos, buenos o malos, de llevar por mejor camino la revisión del problema permanecerían estériles en medio del apasionamiento político. Los últimos debates escolares, entre agosto y diciembre de 1951, parece que, si bien no permiten abrigar esperanzas halagüeñas, sí presagian un comienzo de cordura entre los polemistas. Pero para dar mayor gravedad al caso, si la mera cuestión docente en Francia ha encontrado dificultades insuperables de tipo político, peor es la certeza de comprobar que aquella cuestión está provocando un gravísimo caso de mayoría gubernamental y, como consecuencia, de estabilidad política. ¿Cuánto tiempo podrá resistir el estado general que mantiene aún enhiesto, pero vacilante, el edificio del actual Gobierno francés?

EL GRAN DEBATE ESCOLAR

El 24 de agosto de 1951 comenzó el gran debate sobre la ayuda a la Enseñanza libre, es decir, religiosa. El Gobierno presenta un proyecto de créditos suplementarios a las becas de Enseñanza

Media, que podrían concederse también a alumnos de las Escuelas libres en igualdad de derechos. Los diputados simpatizantes de estas Escuelas elaboraron una propuesta común para la concesión de un subsidio escolar de 1.000 francos trimestrales a los padres del alumno. Pero llega la deserción de los radicales, políticamente de derechas, pero respetuosos inmutables de los ideales laicos republicanos, e intentan combatir el proyecto gubernamental. La prensa católica se encrespa, recordando la ayuda prestada por los católicos a los radicales en las recientes elecciones. Las izquierdas organizan sus "batallones educativos". Entra en liza la "defensa laica" en forma de una "Federación de la Educación Nacional", el "Sindicato Nacional de Profesores", el "Consejo de los padres de alumnos de la Escuela laica" y la antigua *Ligue française de l'enseignement*; todos ellos agrupados en un *Comité de defensa laica*.

Y el Gobierno, batido por todas partes, tuvo que ceder en varios terrenos. En las reuniones de la Asamblea Nacional, en septiembre, se estudió el problema de las *Bolsas de estudio* y del *Subsidio familiar*, que dió lugar, una vez revisado por el Senado, a la *ley Barangé*, según la cual se concede a cada cabeza de familia, con hijos en Escuelas primarias, un subsidio de 1.000 francos por niño y trimestre de escolaridad. Para los asistentes a la Escuela libre, esta subvención se enviará directamente a la Asociación de padres de alumnos del establecimiento, para lo cual el cabeza de familia deberá presentar un certificado escolar firmado por el director de la Escuela correspondiente.

Esta victoria pírrica de los católicos franceses no pasa de ser un símbolo. La cifra de ayuda —1.000 francos trimestrales— es insignificante, aunque tenga, efectivamente, el valor de ser un triunfo arrancado a la IV República laica. Pero este mismo triunfo ha encorajinado al sector contrario, consciente también del valor simbólico de las leyes Barangé y Bolsa de estudios. En consecuencia, el país vive ahora agitaciones y huelgas, como la general de maestros celebrada a finales de octubre de 1951, y la de profesores del 9 de noviembre. Algunos Consejos Generales y numerosos Consejos Municipales de extrema izquierda han votado órdenes del día manifestando su protesta, de acuerdo con la actitud consignada por la Liga de Enseñanza. Cinco mil manifestantes laicos prestaron juramento ante la estatua de Ferry, el viejo repúblico laico, en Saint-Dié, y

monsieur Bayet hizo gala de todos los malabarrismos demagógicos, concentrados en esta afirmación profética: "¡Petain no vencerá a Ferry!"

PESE A TODO, HAY ESPERANZAS

Esta impresión general de la polémica sobre la ayuda oficial a la Enseñanza privada, parece no estar de acuerdo con la actitud esperanzada y optimista que Maurice Duval expresa al cierre de su artículo "L'aide Publique à l'enseignement privé", publicado en el número de enero último de *Ecrits de Paris*. Según el autor, pese al estado de lucha casi permanente en la Cámara, no habrá guerra de Escuelas, pues una cosa son los argumentos demagógicos de un Bayet, y otra el hecho de que existan sectores amplios del país, entre los no beligerantes, que votan por la ayuda a los maestros de las Escuelas privadas, marginando toda consideración de orden político. Muchos de estos franceses han visto en el Gobierno promulgador de las dos leyes un gesto de pacificación. Ya no estamos —escribe Duval— en los tiempos heroicos en que Francia estaba escindida en dos campos: laicos y republicanos, de una parte; clericales y conservadores, de otra. Si bien es cierto que existen hoy día Bayets y Deixonne para clamar por "el aplastamiento del clericalismo", cuando se trata de ayudar a los maestros de la Escuela privada el alcance de su propósito no apasiona a nadie.

Para terminar: el problema sigue en pie. Las dos leyes votadas —cuyo estudio más detenido prometemos para el número próximo— no resuelven, ni mucho menos, el problema escolar. Cuanto más, permiten mantener el *statu quo* (esto es, las escuelas abiertas) hasta que se encuentre una solución definitiva. Por ello, pese a la dimisión de Paul Boncourt y a la deserción socialista, del M. R. P. y de los radicales (tres fuerzas que no saben ponerse de acuerdo consigo mismas en el campo educativo), la *Comisión Escolar* debe continuar incansable en sus tareas, dando seguimiento a los trabajos previos que determinaron la laboriosa construcción de la ley Barangé. Porque está claro, de acuerdo con Maurice Duval, que toda esta polémica no ha sido inútil, sino, al contrario, muy provechosa, tanto en el terreno de la Enseñanza como en el político y el religioso.

ENRIQUE CASAMAYOR